



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES
FCT 3938/2015

Corrientes, 15 de diciembre de dos mil veintidós.

Y Visto: el incidente de excarcelación en autos “Rausch Matías Benjamín s/ Infracción ley 24.769” Expte. N° FCT 3938/2015 del registro de este Tribunal, provenientes del Juzgado Federal de Corrientes N° 1, de esta ciudad.

Considerando:

I.- Que reingresan estas actuaciones a esta Alzada, en virtud de lo dispuesto en la resolución de fecha 14 de julio de 2021, dictada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, en la que se resolvió “*HACER LUGAR a los recursos de casación interpuesto por el fiscal –por mayoría- y la querella, SIN COSTAS, CASAR lo decidido en los puntos I y II –por mayoría- de la resolución recurrida y en consecuencia remitir las presentes actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes a fin de que analicen los agravios aquí planteados por los recurrentes (arts. 456, 470, 471, 530 y concordantes del C.P.P.N.)*”.

En tal pronunciamiento, se consideró que conforme los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sus fallos “*Santillán*” y “*Quiroga*”, ya se ha reconocido que la querella como órgano del Estado, está legitimado para impulsar el proceso en solitario. Asimismo, manifestaron que, de acuerdo con la jurisprudencia sentada por el Máximo Tribunal, el acusador particular puede proseguir en soledad con el avance del proceso a la etapa del juicio con la formulación del correspondiente y oportuno requerimiento de elevación a juicio, todo ello con ausencia de requisitoria fiscal, por lo que, con mayor razón resulta viable la actuación del querellante en esos términos en la etapa de instrucción.

En relación a la adhesión formulada por el Fiscal, entendieron que dicha facultad le fue conferida por éste Tribunal, al correrle vista para ese efecto, dado que se citó el art. 453 del CPPN, es decir, ésta Alzada le dió a dicha parte, la oportunidad para adherir a la impugnación del acusador

Fecha de firma: 15/12/2022

Firmado por: MIRTA GLADIS SOTELO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SELVA ANGELICA SPESSOT, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NADYA AYMARA MOOR, SECRETARIA DE CAMARA



#27186594#352956565#20221215115314311

particular, y por ello, el representante del Ministerio Público Fiscal usó esta facultad y formuló su adhesión, por lo que, luego denegarle ese derecho, resulta una decisión controvertida con la adoptada al darle la oportunidad para hacerlo, poniendo en evidencia la arbitrariedad de la resolución, afectándose de ese modo la validez de lo resuelto, imponiendo en consecuencia la anulación por aplicación de los artículos 123 y 404 inc. 2 del CPPN.

II.- Antes de ingresar al análisis de la cuestión sometida a estudio, cabe señalar que ingresan en una primera oportunidad las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación promovido por la parte querellante (Administración Federal de Ingresos Públicos), contra la resolución del juez *a quo*, de fecha 26 de marzo de 2018, por el cual, resolvió sobreseer al imputado Matías Benjamín Rausch (art. 336 inc. 3° del CPPN) en orden al delito de evasión simple (art. 1 de la ley 24.769).

En dicha oportunidad la parte recurrente, sostuvo que el imputado intervino en una maniobra evasiva por la que ocultaron ingresos provenientes de una actividad gravada, razón por la que se dictó el auto de procesamiento, el que fuera confirmado por esta Cámara; sin embargo en virtud de la sanción y puesta en vigencia de la ley 27.430 (30/12/2017) el juez *a quo*, decidió sobreseer al nombrado por aplicación de la ley penal más benigna, observándose que los montos evadidos no superan –actualmente el mínimo previsto por el art. 1 de la ley 24.769 (\$1.500.000). Afirmó, que no corresponde la aplicación retroactiva de la ley más benigna (ley 27.430) y transcribió textualmente los párrafos de las resoluciones de la Procuración General de la Nación (PGN) N°5/12 y 18/18, afirmando que coincide con tales argumentos. Por todo ello, solicitó la revocación de la resolución y la continuación de la instrucción según su estado. Hizo reserva del caso federal.

Que, a su turno, el Fiscal General Subrogante adhirió al recurso interpuesto por la querella, en el entendimiento que la aplicación de la ley penal más benigna no debe aplicarse de forma mecánica e indiscriminada.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES
FCT 3938/2015

Refirió que el mensaje de elevación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, consideró que su aplicación corresponde cuando se verifica un cambio general, sustancial y permanente en la valoración social de la conducta reprochable. Sostuvo, que la modificación del art. 1º de la ley 24.769 -modificada por la 27.430- tuvo como objetivo la actualización y compensación de dicha suma frente a la depreciación de la moneda nacional. Expresó que no es correcta la tesis de la necesidad del cambio de valoración social para tornar aplicable el art. 2 del Código Penal, ya que se desconocería el criterio sentado por la CSJN en “Cristalux” (Fallos, 329:549) ratificado en el fallo conocido como “2x1”. En razón de ello, concluyó que el juez ha efectuado una valoración arbitraria y desacertada correspondiendo declarar la nulidad del fallo.

Que, ingresados –en aquella oportunidad- los autos a éste Tribunal, mediante la resolución de fecha 18 de octubre de 2018, se resolvió “1) *Declarar mal concedido el recurso de apelación deducido por la parte querellante (AFIP) a fs. 166/169; 2) Declara inadmisibile la adhesión postulada por Ministerio Público Fiscal a fs. 175/176 vta.*”, pronunciamiento que en fecha 14 de julio de 2021, fue revocado por la Cámara Nacional de Casación Penal.

III.- a) Admisibilidad del recurso:

En primer lugar, y previo a ingresar al tratamiento de los agravios interpuestos por el recurrente, corresponde analizar la cuestión vinculada a la legitimidad de la parte querellante respecto a la interposición del recurso de apelación contra la resolución del magistrado de fecha 26 de marzo de 2018 y la posterior adhesión formulada por el Fiscal General Subrogante, ante esta Alzada.

Sobre ello, cabe mencionar que las suscriptas, con posterioridad al fallo emitido por éste Tribunal en fecha 18 de octubre de 2018 –posteriormente anulado por la Cámara de Casación Penal-, realizando un



nuevo análisis de la cuestión, -con anterioridad- ya se han expedido favorablemente respecto a la legitimación del querellante particular para apelar en solitario las decisiones del magistrado de primera instancia, en los autos “*Tipoití S.A. P/Infracción Ley 24.769*”, Expte. N° FCT 17000004/2011/CA2, y más recientemente en los autos “*Picchio Huberto Tomás, Ledesma Eduardo Daniel s/ Estafa*” Expte FCT 6142/2017/CA1 y “*Zhou Zhen s/ Infracción ley 24.769*” Expte. N° FCT 2531/2013/CA1.

Que, tal como lo sostuvo la Cámara de Casación Penal, en el pronunciamiento emitido en fecha 14 de julio de 2021, la querella se encuentra facultada para impulsar el proceso en solitario, dado que sostuvo que “...la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que reiteradamente ha reconocido al querellante la facultad de recurrir en solitario y lo ha dejado sentado en sus fallos “*Santillán*” 321:2021 y “*Quiroga*” 327: 5863 [...] si esto no fuese así, sería un contrasentido que el código adjetivo (art. 180, in fine) le otorgará –como lo hace- a la parte que pugna por constituirse en querellante la potestad de recurrir ante la Cámara de Apelaciones respectiva con el objeto de que se ordene la realización de la instrucción...”. Similar criterio habría seguido dicho Tribunal, en su Sala III, en fecha 07/07/2017 en la causa caratulada “*Latinoamérica S.A.; Da Silva Zago, Fabio José s/Recurso de Casación*” Expte. N° 33021019/2014/4/1/CFC1, proveniente de esta jurisdicción.

Asimismo, del juego armónico de las normas rituales, surge que el art. 432 de la ley procesal establece que “*el derecho a recurrir corresponderá tan solo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo*”; a su vez repárese que el art. 337 establece que **el querellante cuenta con legitimación para apelar el sobreseimiento por cualquiera de sus causales –en el caso por prescripción (art. 336 inc. 1)-; y los arts. 180 y 195 in fine habilitan aún al pretenso querellante para apelar el auto que desestima la denuncia y ordena el archivo cuando ella no constituya delito o no se pueda**





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES
FCT 3938/2015

proceder, ambos supuestos tratan de una decisión que cierra definitiva e irrevocablemente la posibilidad que el imputado se enfrente a una pena (art. 335).

Por lo tanto, conforme ese plexo normativo la querella se encuentra legitimada para apelar tanto la desestimación de la instrucción por inexistencia de delito como el sobreseimiento por prescripción; esta conclusión también deriva de la misma lógica y técnica parlamentaria, puesto que la legislación procesal reconoce en cabeza del Ministerio Público Fiscal el ejercicio de la acción penal de conformidad con el art. 120 de la CN; y a tal punto ha llegado el celo del legislador por el cuidado de esta función que previó de manera expresa los casos en que dota a la querella de la potestad impugnativa –art. 435 del CPPN- (Confr. “Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado”; D’Albora, Francisco J.; Ed. Abeledo Perrot, 2009, pág. 173 respecto de la facultad impugnativa de la querella); sin embargo nada dice que deba exigirse que el Ministerio Público Fiscal acompañe siempre su impugnación contra el auto de sobreseimiento y de desestimación de la instrucción por inexistencia de delito; otra interpretación importaría hacer decir a la ley adjetiva lo que no dice.

Tal posición se sustenta en la doctrina desarrollada en la causa “*Campbell*” por el Dr. Hornos a cuyo voto adhirió el Dr. Palazzo remitiéndose a su opinión vertida en la causa “*Eraso, Raúl Alfredo y otros s/recurso de Casación*” (Reg. Nro. 12.744, rta. el 04/12/2009), el primero expresó “... *Consideró entonces que el querellante, en el caso: los representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, tuvo legitimación activa autónoma para recurrir el sobreseimiento del encausado...*”. (Cámara de Casación Penal, Sala IV, Causa Nro. 12.742 Reg. N° 15.219.4 del 07/07/2011).

En igual sentido, la opinión vertida por la Dra. Ana María Figueroa en la causa “*Legajo N°3- Querellante: AFIP DGI Imputado: Samid, José*”



Alberto y otro s/Legajo de Apelación” al analizar la legitimidad de la querella, reiterando el criterio sostenido en la causa “Ale, Guillermo Incidente de Prescripción de la acción penal” Reg. N°T1001475, Rta. el 30/12/2015 donde se sostuvo que “...a partir de doctrina sentada por la Corte Federal en el caso “Santillán” (Fallos:321:2021) [...] el querellante se encuentra legitimado para impulsar en solitario la causa penal en la etapa de juicio sin que sea necesario, a tal efecto, el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal. Se ha entendido de tal modo que asiste a todos los litigantes el derechos de obtener una sentencia fundada y que para poder llegar a ese momento los efectos de “Santillán” deben retrotraerse desde el comienzo de la causa penal pues sino lo resuelto por el Alto Tribunal no tendría los alcances allí indicados...” (Cámara de Casación Penal, Sala I, Causa Nro. 1272 Reg. N° 1343/16.1 del 14/07/2016). Cabe destacar que en ambos casos se analizó la legitimación de la AFIP DGI, querellante, como legitimada para apelar; en el primer supuesto se rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa a los efectos de que se revoque la resolución que rechazaba el sobreseimiento y en el segundo se hizo lugar a dicho recurso propiciado por el organismo estatal a los efectos de que se revoque la decisión que confirmaba el sobreseimiento del imputado.

A mayor abundamiento, la Cámara de Casación Penal, en estos autos, afirmó que “...si de acuerdo con la jurisprudencia sentada por el Máximo Tribunal en el caso “Santillán” [...] el acusador particular puede proseguirse en soledad con el avance del proceso a la etapa del juicio con la formulación del correspondiente y oportuno requerimiento de elevación a juicio, ello con ausencia de requisitoria Fiscal, con mayor razón resulta viable la actuación del querellante en esos términos en la etapa de instrucción...”(Causa N° 3938/2015/CFCI “Rausch Matías Benjamín s/ Recurso de Casación”).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES
FCT 3938/2015

Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la legitimación de la parte querellante para promover la vía recursiva intentada, y en consecuencia admitir el recurso de apelación interpuesto, contra resolución N° 199, de fecha 26 de marzo de 2018.

Ahora bien, cabe señalar que se advierte que el representante del Ministerio Público Fiscal, en esta instancia, adhirió en igual sentido a la apelación de la querella, fundamentando su adhesión de manera autónoma.

Respecto a ello, también con anterioridad en los pronunciamientos ya indicados, se sostuvo que –a criterio de las suscriptas- el instituto de la adhesión, es un recurso independiente y autónomo al del que adhiere, ello conforme la regulación procesal, por lo que, en principio debe reputarse que la adhesión del Ministerio Público Fiscal es distinto del originario.

Ello, en tanto la norma adjetiva –art. 453 del CPPN- faculta a adherir a quienes tengan el derecho de recurrir y el precedente mencionado –“*Latinoamérica S.A.; Da Silva Zago, Fabio José s/Recurso de Casación*” Expte. N° 33021019/2014/4/1/CFC1- refiere a otros presupuestos formales: que sea interpuesto en el plazo que indica dicho precepto –tres días- que comienza a correr desde que los autos son recibidos en la Alzada; y además que contenga una fundamentación diferente a la originaria.

A dicha solución también se arriba mediante las definiciones del instituto de Gisela Morillo Guglielmi que lo considera “... una especie de prórroga al término para interponer los recursos. Así entendida a la adhesión, no se advierten obstáculos para admitirla, pues la decisión no alcanza la calidad de cosa juzgada hasta tanto se cumplan todos los plazos para recurrirla, incluidos los de la adhesión...” agrega luego que debe acordársele “... su justo valor al originario silencio de quien luego interpone su recurso por adhesión a la vía abierta por otra de las partes.” (Revista de Derecho Procesal Penal. Vías de impugnación en el proceso penal. Nuevas



tendencias y cambios de paradigma – I; 2013 – I; Rebinar Culzoni Editores; pags. 214 y 218).

La autora citada explica que la limitación al instituto de la adhesión debería darse cuando “*el fiscal o los querellantes optan por no recurrir en el plazo originario, -dice- no podrán luego sumarse en contra de quien abrió la instancia, al interpuesto por la defensa para mejorar la posición del acusado*” (sic. Ob. Cit. pag. 221).

Al respecto, el presente caso no trata del recurso interpuesto por la defensa del imputado al que adhiere el órgano acusatorio. Aquí la situación es diferente: querella y Ministerio Público Fiscal mantienen una misma posición alzándose contra el sobreseimiento, posición que éste último sostuvo frente a esta Alzada.

A mayor abundamiento, los autores Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray dicen “*La obligación de darle intervención corresponde –al Fiscal General-, según el texto, tanto si el apelante fuere el “agente fiscal” como si tuviere la posibilidad de adherir al recurso interpuesto por la parte imputada o aún la querellante.*” (confr. Ob. Cit. pag. 1199).

Todo lo cual importa que no hay razón para negarle el instituto de adhesión al Fiscal General, cuando la que impugna previamente es la querella y tiende a caracterizar a la adhesión como recurso distinto del interpuesto de manera originaria; por lo tanto, resulta que el recurso del Ministerio Público Fiscal interpuesto mediante la adhesión resultaría independiente y autónomo al del que adhiere, ello conforme la regulación procesal del instituto.

Sorteada esta cuestión previa, y siguiendo con el análisis de admisibilidad de la adhesión en esta alzada del Ministerio Fiscal, en estos autos se verifican iguales circunstancias que las señaladas en el precedente citado, ya que ambos acusadores mantienen igual interés contrario al sobreseimiento, es decir “*... no es posible sostener que exista oposición al progreso del ejercicio de la acción penal pública de parte del órgano*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES
FCT 3938/2015

constitucionalmente habilitado para ello (art. 120 de la CN) ... –y además no existe- norma procesal alguna que prohíba que el fiscal adhiera al recurso de otro acusador en contra del imputado (causa N° CFP 8162/2004/4/CFC1 caratulada “De Vido, Julio s/Recurso de casación” reg. N°1817/15 del 30 de octubre de 2015, sala III)” (sic.).

Por otra parte, el Fiscal de Cámara al adherir en esta instancia cumplió con todos los presupuestos procesales para la viabilidad de su oposición, al respecto se dijo que “... *el procedimiento de adhesión... no encierra derogación de las restantes condiciones de orden formal que aquella ha impuesto a los fines del ejercicio de la impugnación; de allí que quien adhiere al recurso interpuesto por otro debe expresar, bajo pena de inadmisibilidad, los motivos en que se funda (Conf. “Guardia, H. C. y otros s/recurso de casación” reg. 47, causa Nro. 398, rta. el 6/4/95; “Zidar Gregorio A. s/ recurso de casación”, reg. 135 causa 736, rta. el 7/5/96; “Rongo, Ricardo s/ Recurso de casación”, reg. 27, causa 16, rta. el 15/9/93; entre muchas otras)- (sic)”.*

Finalmente su adhesión fue oportuna en virtud de que “... *la norma –art. 453 del CPPN- es clara en cuanto establece que al fiscal de Cámara se lo notifica de la posibilidad que tiene de adherir “en cuanto las actuaciones sean recibidas” en la Alzada, por lo que es recién a partir de ese momento que comienza a correr el termino allí señalado –tres días desde que se efectúa la notificación- debiendo formularse tal presentación, claro está, en la instancia revisora ...” (sic.).*

Por lo que corresponde reputarse, formalmente admisible la adhesión formulada por el Fiscal ante esta Cámara conforme al criterio señalado por la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.

b) Tratamiento de los agravios expuestos:

Fecha de firma: 15/12/2022

Firmado por: MIRTA GLADIS SOTELO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SELVA ANGELICA SPESSOT, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NADYA AYMARA MOOR, SECRETARIA DE CAMARA



#27186594#352956565#20221215115314311

Habiendo resuelto la legitimación del querellante particular y la adhesión del Ministerio Público Fiscal, corresponde ingresar al tratamiento de los agravios expuestos por las partes recurrentes.

Que, puntualmente, el hecho que se le atribuyó al imputado es no haber ingresado al Fisco Nacional -mediante la evasión del pago de tributos- los siguientes importes: \$682.794,74 en concepto de Impuesto al Valor Agregado –periodo 2011-, \$843.335,31 en concepto de Impuesto al Valor Agregado –periodo 2012-, \$478.519,00 en concepto de Impuesto al Valor Agregado –periodo 2013-, y \$1.004.566, 52 en concepto de Impuesto a las Ganancias –periodo 2011-.

Que, en lo central, el agravio formulado por la parte querellante – con adhesión del Fiscal General- consiste en la oposición a la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna (ley 27.430), bajo los fundamentos de las resoluciones de la Procuración General de la Nación (PGN) N°5/12 y 18/18, respecto al sobreseimiento dictado a favor de Matías Benjamín Rausch por el delito de evasión simple (art. 1 de la ley 24.769).

Dicho ello, en relación a la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna (ley 27.430) respecto al hecho atribuido a Rausch, corresponde remitirnos al criterio ya expuesto en los autos “*Santa Julia S.A- Romero Feris, Carlos Alberto, Genesini Miguel Ángel, Franco Javier Arturo s/Infracción ley 24.769*” FCT 150/2015/CA2 y más recientemente, en los autos “*Tisocco Norberto Moisés p/ Evasión Agravada Tributaria*” Expte. N° FCT 7549/2019/CA1, entre otras resoluciones, donde la cuestión ya fue dilucidada mediante la aplicación de los conceptos vertidos por la mayoría en el fallo “*Cristalux*” de la CSJN (11/04/2006).

Que, en dicha oportunidad se estableció que el delito de evasión se encuentra regulado como una ley penal en blanco, cuya estructura se compone con un precepto general, que se halla integrado por complementos normativos





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES
FCT 3938/2015

de carácter extrapenal, que tienen la función de delimitar y complementar la conducta prohibida o el deber impuesto al sujeto activo.

En este sentido, cabe mencionar que la aplicación del principio de la ley más benigna no es absoluto, en razón de que las leyes penales en blanco, eventualmente poseen complementos normativos que son de naturaleza *variable o meramente formal*. Además, se observa que al modificarse dichos complementos normativos, las razones que originan aquellos cambios, –en su mayoría– no pertenecen al derecho penal, resultando necesario desentrañar el motivo de los cambios para evaluar la procedencia o no de la aplicación del principio antes mencionado. Es así, que la modificación de la ley 24.769 –a su vez modificada por la ley 26.735–, y recientemente por la nueva ley 27.430, establece un nuevo régimen impositivo, que tiene por objeto principal evitar los efectos de la depreciación monetaria en materia económica generado por las constantes fluctuaciones en la economía del país, resultando coherente y necesario llevar a cabo actualizaciones reiteradas en los montos dispuestos, a fin de adecuar los tributos a la realidad económica actual.

Ahora bien, de dichas modificaciones realizadas por la ley 27.430, –en lo que aquí interesa– respecto del delito de evasión simple, se advierte que para la consumación de la conducta punible, debe necesariamente considerarse “*que el monto evadido excediere la suma de un millón quinientos mil de pesos (\$ 1.500.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual [...]*”.

Por lo tanto, se observa que el nuevo monto establecido por la ley, no modifica en nada la conducta prohibida o debida por el contribuyente, es decir, continúa siendo objeto de prohibición, quién por acción u omisión “*evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires*”, razón por la cual, no se observa una distinta valoración por parte del legislador de la conducta que castiga el tipo penal en cuestión, ni tampoco un cambio en el fundamento de su punibilidad, sino más bien, se produce una modificación de un elemento



que es accidental, coyuntural y fluctuante –monto mínimo de la evasión-, provocando que la conducta prohibida establecida primigeniamente en el tipo penal, permanezca intacta (el subrayado nos pertenece).

En esta misma línea argumentativa, cabe reiterar que el monto establecido para la constitución del delito, reviste la categoría de condición objetiva de punibilidad –atento que así lo define la propia ley-, es decir, es una circunstancia de hecho pasible de numerosos cambios, que no altera la conducta prohibida por la norma –evadir tributos- dado que como ya mencionó anteriormente, el monto no forma parte del tipo objetivo, ni del injusto penal, encontrando su ubicación correcta en el estrato de la “punibilidad”. Por ello, en determinados momentos, el legislador mediante la modificación de estos complementos de naturaleza mutable, variable o circunstancial, consideró oportuno actualizar los montos previstos a fin de adecuarlos a la realidad económica imperante.

Por lo tanto, dado que las modificaciones que se realizan sobre el complemento normativo, son de carácter fáctico, variable y circunstancial, dichas modificaciones sólo operan hacia el futuro, es decir de manera irretroactiva, atemperando de esta manera el aspecto punitivo de aquellos hechos. Tal es así, que esta nueva modificación introducida por la ley 27.430, que prevé un monto más elevado (\$1.500.000) como mínimo del delito de evasión -al no integrar el tipo penal-, no es un nuevo requerimiento para que se configure el delito, el cual, a la fecha de su comisión –periodos 2011, 2012, 2013- se encontraba perfectamente configurado.

Que, dado que los montos son considerados condiciones objetivas de punibilidad, cabe concluir, que ello no daría lugar a la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, dado que el cambio producido no es de naturaleza normativa, sino meramente fáctico y las conductas realizadas en un momento dado, continúan siendo sancionadas conforme a la ley vigente al cometerse el hecho delictivo, siendo concebidas tales conductas como





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES
FCT 3938/2015

disvaliosas, manteniendo de este modo, inalterado los elementos del tipo penal. Asimismo, teniendo principalmente en cuenta los motivos del legislador para elevar los montos y las necesarias modificaciones en materia tributaria, cabe concluir, que no corresponde la aplicación retroactiva de la ley más benigna (ley 27.430), debiendo aplicarse la ley vigente al momento del hecho (ley 24.769).

Por otra parte, las suscriptas no desconocen que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se expidió recientemente sobre esta cuestión, en fecha 28 de octubre de 2021, a través del fallo “*Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769*”, donde estableció que las sentencias de los tribunales inferiores que se aparten de los precedentes de la Corte, deben necesariamente aportar nuevos y fundados argumentos, fijando las circunstancias de hecho en la que se basarían tales distinciones, ello a fin de evitar caer en un pronunciamiento nulo.

En este sentido, la Corte entendió en aquella oportunidad, no era posible conocer la razón por la cual, la cuestión referida a la “*actualización monetaria*” debería autorizar a no aplicar el precedente “Palero” y afirmó que “...sostener –como se hizo-, que el aumento que introdujo la reforma sancionada por la ley 27.430, en los “montos cuantitativos” de los tipos penales tributarios, haya respondido a una “actualización monetaria”, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno, lo cual conduce también a la descalificación del auto apelado desde esta perspectiva...”.

Sobre ello, y en relación a lo anteriormente expuesto, cabe mencionar que, en este caso, el principal fundamento para la no aplicación de tal precedente –“Palero”-, no radica en que la modificación de los montos de



los tipos penales tributarios responde a una “*actualización monetaria*”, como había ocurrido en el fallo “*Vidal*”, sino más bien, en el carácter de la ley penal en blanco que regula el delito de evasión, y sobre todo, la implicancia que reviste la modificación de la norma extrapenal, mediante un cambio meramente fáctico, razón por la cual, dicho complemento –a nuestro modo de ver- no debería ser alcanzado por el principio de la ley más benigna (art. 2 del CP). Ello, sumado a que se advierte a todas luces, que las modificaciones realizadas por la ley 27.430, están orientadas en la realidad económica, regulando de este modo, cuestiones ajenas a la materia penal.

Por los argumentos expuestos, corresponde revocar el auto interlocutorio dictado por el juez *a quo*, en fecha 26 de marzo de 2018, que dispuso sobreseer al imputado Matías Benjamín Rausch (art. 336 inc. 3º del CPPN) en orden al delito de evasión simple (art. 1 de la ley 24.769), debiendo continuarse con la investigación respecto de la presunta comisión del delito de evasión simple (art. 1 de la ley 24.769).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE: HACER LUGAR a los recursos de apelaciones interpuestos por la parte querellante (Administración Federal de Ingresos Públicos) y el Ministerio Público Fiscal, y en consecuencia, revocar el auto interlocutorio de fecha 26 de marzo de 2018, reenviando las actuaciones al juez *a quo*, para que continúe con la investigación respecto de la presunta comisión del delito de evasión simple (art. 1 de la ley 24.769).

Regístrese, notifíquese al Centro de Información Judicial dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Cf. Acordada 05/19 de ese Tribunal), cúmplase con la carga en el sistema Lex100 y remítase al juzgado de origen a sus efectos, sirviendo la presente como atenta nota de envío.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES
FCT 3938/2015

Nota: El Acuerdo que antecede fue suscripto por las Sras. Juezas que constituyen mayoría absoluta del Tribunal (art. 109 R.J.N.), por encontrarse en uso de licencia el Dr. Ramón Luís González. Secretaría de Cámara, 15 de diciembre de 2022.

Fecha de firma: 15/12/2022

Firmado por: MIRTA GLADIS SOTELO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SELVA ANGELICA SPESSOT, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NADYA AYMARA MOOR, SECRETARIA DE CAMARA



#27186594#352956565#20221215115314311